



e-cadernos CES

28 | 2017

Etnicidad, territorio y pueblos indígenas: paradojas y desafíos de las políticas neoliberales

Impactos sociales y ambientales de la explotación de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz (México)

Social and Environmental Impacts of Hydrocarbons Exploitation in the Papantla Municipality of Veracruz, Mexico

Victoria Chenaut



Edición electrónica

URL: <http://journals.openedition.org/eces/2433>

DOI: 10.4000/eces.2433

ISSN: 1647-0737

Editor

Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra

Referencia electrónica

Victoria Chenaut, « Impactos sociales y ambientales de la explotación de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz (México) », *e-cadernos CES* [En línea], 28 | 2017, Puesto en línea el 15 diciembre 2017, consultado el 30 abril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/eces/2433> ; DOI : 10.4000/eces.2433



VICTORIA CHENAUT

IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ (MÉXICO)

Resumen: Este artículo destaca los impactos sociales y ambientales que tienen lugar debido al proceso de exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) en el municipio de Papantla, Veracruz, indicando algunos de los cambios que sucedieron como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas en el sector energético. En la primera sección señalo afectaciones que las actividades petroleras ocasionan en las comunidades y las tensiones que existen entre los habitantes y las empresas petroleras. En la segunda, analizo dos casos de protestas de los afectados que motivaron que se ejerzan acciones judiciales en su contra, lo que implica una criminalización de la protesta social que favorece las políticas extractivas.

Palabras clave: criminalización, extractivismo, hidrocarburos, impacto social y ambiental, municipio de Papantla.

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF HYDROCARBONS EXPLOITATION IN THE PAPANTLA MUNICIPALITY OF VERACRUZ, MEXICO

Abstract: This article highlights the social and environmental impacts that occur due to the process of exploration and exploitation of hydrocarbons (oil and gas) in the municipality of Papantla, Veracruz, indicating some of the changes that took place as a result of the neoliberal policies applied in the energetic sector. In the first section, I point out the effects that oil activities have on the communities and the tensions that exist between the inhabitants and the oil companies. In the second, I analyze two cases of protests by those affected that led to legal actions being taken against them. This implies a criminalization of social protest that favors extractive policies.

Keywords: criminalization, extractivism, hydrocarbons, municipality of Papantla, social and environmental impact.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando en 1868 el médico estadounidense Adolfo Autrey organizó la Compañía Exploradora de Petróleo del Golfo de México –en el actual municipio de Coatzintla– obtenían cuatro o cinco barriles diarios de petróleo que en 1870 eran llevados a refinar a Papantla. Antes de 1900 la producción petrolera de México era “insignificante” debido a la carencia de recursos, al aislamiento geográfico, la falta de personal capacitado y de mecanismos de financiamiento. Además, quienes emprendían el negocio carecían de conocimientos en la materia, ya que eran “comerciantes, abogados, médicos, aventureros, sacerdotes o políticos”. El aporte de estos hombres consistió en localizar yacimientos importantes de petróleo, aunque sólo pudieron trabajarlos en forma superficial. Entre ellos, los ubicados en el norte de Veracruz (Álvarez de la Borda, 2006: 20-21), donde se localiza el municipio de Papantla.

Estos precursores estaban lejos de suponer que en el siglo XX la industria petrolera de México se desarrollaría en forma vertiginosa, primero con la intervención de compañías extranjeras y, luego, cuando el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) nacionalizó el petróleo. La abundancia del petróleo que produjo México en las siguientes décadas fue tan grande, que antes de la Reforma Energética (2013) la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) ocupó el tercer lugar mundial como productor de crudo, “aportando en promedio más del 40% del presupuesto público”, por lo que contribuyó en forma importante a la economía del país (Pérez, 2017: 39).

PEMEX tiene una larga historia en su relación con aquellas poblaciones donde ha desarrollado tareas de exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) y, en el devenir del tiempo, la ciudad petrolera de Poza Rica –que surgió en 1932– se convirtió en un polo de desarrollo regional, atrajo migrantes de diferentes partes del país, reordenó el espacio y la vida social, y consolidó la formación de una clase obrera de trabajadores petroleros que se organizaron en un sindicato y emprendieron diversas luchas, forjándose nuevas identidades como la del trabajador petrolero.

Como hitos en la historia de la explotación de hidrocarburos en la zona de estudio, me interesa destacar la relevancia de la nacionalización del petróleo (1938), que todos los años es una fecha a celebrar, especialmente en la ciudad de Poza Rica, donde esta conmemoración revive y actualiza el sentimiento de patriotismo que “unificó a las regiones, los credos y las clases sociales en una muestra sin precedente de cohesión nacionalista” (Rousseau, 2017: 127). En este sentido, PEMEX se considera un motivo de orgullo nacional, que ha permeado con sus actividades y obras sociales la cultura de las ciudades y regiones donde realiza sus trabajos.

A fines de la década de los ochenta comienza el proceso de privatización de PEMEX, cuando se reestructura su funcionamiento. Posteriormente, se realizan

reformas en materia energética en los años 1992, 1996 y 2008, permitiendo la intervención de capital privado para la extracción y comercialización de los hidrocarburos. De acuerdo con la Reforma Energética promulgada en el año 2013¹ y las leyes secundarias del 2014, los capitales privados nacionales y extranjeros “lograron involucrarse directamente en todas las ramas y momentos de la cadena productiva de los energéticos en México”, ya que pueden explorar y explotar campos de hidrocarburos sin establecer asociaciones con PEMEX, así como importar y producir productos refinados como la gasolina (Geocomunes, 2016: 11-12).

Considero necesario destacar que esta reforma, al favorecer la implementación del modelo de desarrollo extractivista, favorece el despojo de los bienes comunes, la sobreexplotación de los mismos y las consiguientes violaciones de los derechos humanos (Olivares Alonso, 2018b). En síntesis, la reforma se convierte en un parteaguas en la historia del petróleo en México dado que PEMEX, de ser una empresa nacionalizada, se transforma en “*empresa productiva del Estado*, con lo cual se le despoja de su carácter estratégico y de pilar de la soberanía y la seguridad nacional” (Geocomunes, 2016: 13). Estos hechos configuran lo que Bartlett Díaz y Vargas denominan “el proceso de desmantelamiento y privatización de Pemex” (2016: 108). Como consecuencia de estos cambios producto de las políticas neoliberales, se producen nuevas tensiones en la relación de la empresa con los habitantes, debido a que entraron en escena nuevos actores, compañías privadas y el uso de modernas maquinarias y tecnologías que ejercieron impacto en el medio ambiente.

El municipio de Papantla, abundante en hidrocarburos, es parte de una formación geológica conocida como Paleocanal de Chicontepec, que consta de 14 municipios distribuidos en los estados de Veracruz y Puebla. Los habitantes del municipio llevan décadas conviviendo con PEMEX –desde que comenzó a trabajar aquí en forma intensiva en la década de los cincuenta–. En el año 2007, PEMEX buscó reactivar la decaída producción petrolera en esta región (Mota Celis, 2017) a través del proyecto Aceites Terciarios del Golfo (ATG), por lo que las compañías extranjeras comenzaron a tener una fuerte presencia en la zona, realizando diferentes actividades.

El trabajo de campo que realicé en diversas temporadas entre los años 2013 y 2017² está signado por las nuevas dinámicas que estos cambios generan en la región, donde en estos momentos se vive una crisis económica debido a que algunas compañías privadas de petróleo –como Halliburton– se han retirado por la baja en la producción de

¹ Reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución federal que se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el 20 de diciembre de 2013. La nueva Ley de Hidrocarburos se publicó en este Diario el 11 de agosto de 2014.

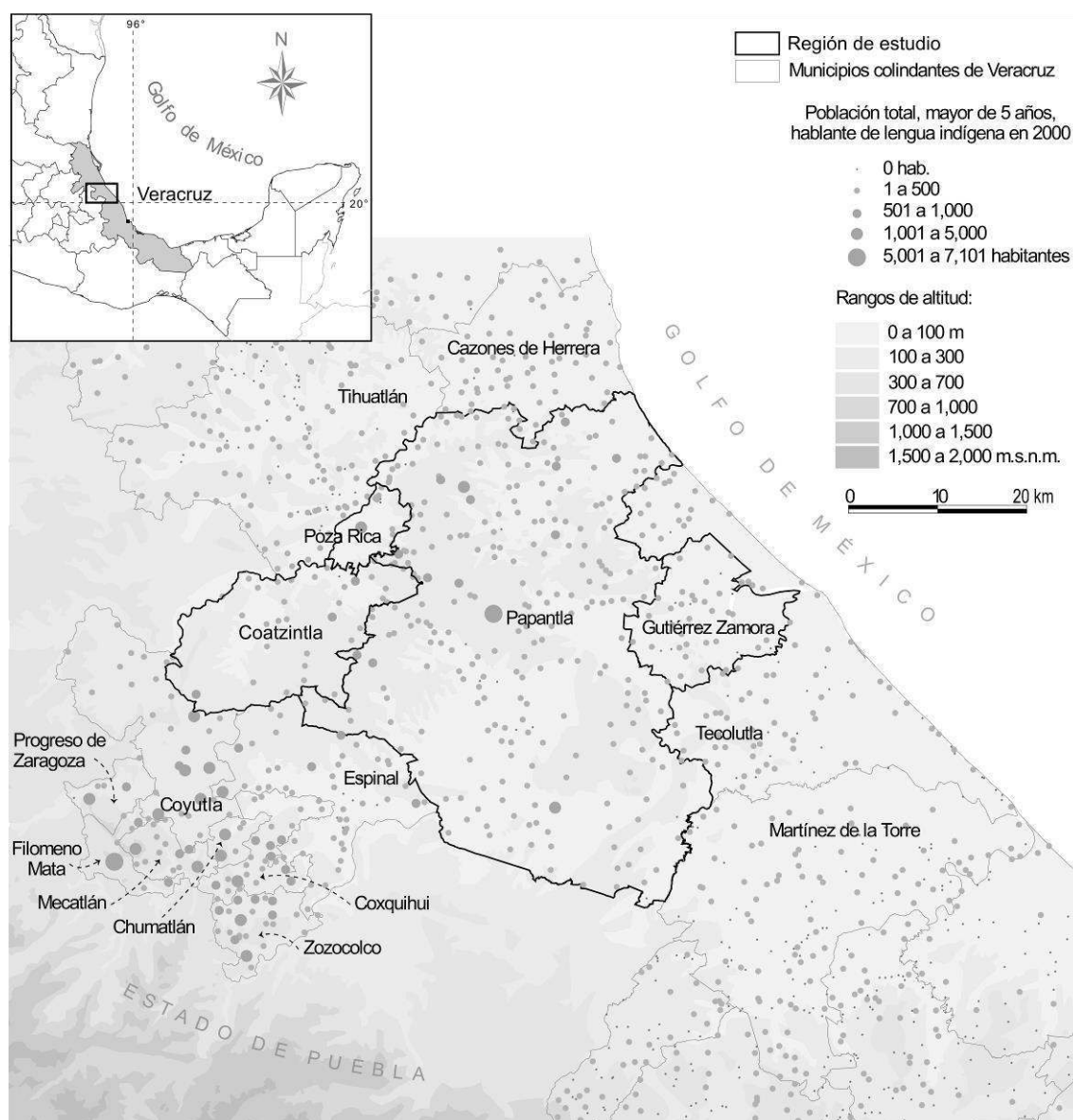
² Agradezco a Amado Olarte, Oscar Espino y Yamilet García Vázquez por el apoyo que me brindaron durante la investigación, así como la colaboración de Carolina Díaz Íñigo y Rocío Ochoa García y los comentarios de Laura Valladares.

energéticos en esta zona; además, la privatización de PEMEX ha ocasionado el despido de trabajadores, lo que incrementa la tasa de desocupación. Esto se inserta en el complejo panorama de la geopolítica del petróleo a nivel internacional, de la Reforma Energética y de la caída de los precios del petróleo que hacen poco redituable su extracción.³

Las cuestiones que se plantean en el presente texto son el resultado parcial de una investigación más amplia en la cual –realizando entrevistas a diversos actores y observación participante– me propongo abordar las expresiones de pluralismo jurídico en el municipio de Papantla, en el marco de implementación de las políticas neoliberales en México que han generado una serie de transformaciones en las áreas rurales. Previamente, realicé investigación sobre relaciones de género y administración de justicia a indígenas la Sierra de Papantla, y al desplazarme al municipio de Papantla –ubicado en la planicie costera– decidí relevar información sobre la actividad petrolera que imprime su sello al paisaje y a la vida de sus habitantes. Tengo en cuenta, como plantea Santos (2009), que el derecho opera en las escalas de lo local, nacional y global, por lo que se producen procesos de hibridación e interlegalidad que impactan a nivel local en los individuos. Además, considero que la política ambiental y energética se constituye en una “arena de disputas”, donde se expresan relaciones de poder y diferentes maneras de concebir y apropiarse de la naturaleza, como sostiene D’Amico (2013: 138) al analizar la explotación petrolera en la provincia de Mendoza, Argentina.

Es indudable que desde sus comienzos la explotación petrolera causó contaminación del medio ambiente por derrames de hidrocarburos y quema de gas, entre otras circunstancias, afectando los cultivos y la salud de los habitantes. En este trabajo me propongo destacar, en líneas generales, algunas de las tensiones y cambios más relevantes que han tenido lugar en el municipio de Papantla en la relación que han mantenido con PEMEX y al producirse la apertura al capital privado que se materializa en la Reforma Energética (2013). En la primera parte del artículo muestro ejemplos de impactos y afectaciones de diverso tipo que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos ocasionan actualmente en algunas comunidades del municipio; en la segunda, analizo casos de afectaciones en los que el común denominador reside en la judicialización de la protesta social, por lo que se emiten órdenes de aprehensión o se establece un procedimiento judicial contra los quejosos.

³ Para ubicar el contexto general de la Reforma Energética (2013) véase, entre otros, Bartlett Díaz y Vargas (2016), Padierna (2015) y Rousseau (2017).



MAPA 1 - Municipios de la Región de estudio mencionados en el texto

Fuente: Sistema de Información Geográfica (SIG Veracruz), CIESAS-IRD.
Elaboración de Rafael Palma Grayeb.

Mi interés por estudiar casos en los que se judicializa la protesta social deviene de mi inserción en el campo de la antropología jurídica, ya que a través de los estudios de casos me propongo indagar en las dinámicas de funcionamiento del derecho y de los mecanismos de regulación, así como las normas y reclamos por derechos que se encuentran en juego en las disputas, las negociaciones y los usos del derecho por parte de los actores sociales (Chenaut, 2014: 39). Esto no significa negar o marginalizar una perspectiva colectiva en la cual los casos que son judicializados se insertan. En la región de estudio se llevan a cabo movilizaciones sociales contra las afectaciones del territorio y en el año 2015 se conforma la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON), cuya meta es establecer alianzas con otras organizaciones indígenas y ambientalistas para oponerse a los

megaproyectos que atentan contra el territorio y la vida, como las hidroeléctricas, gasoductos, minería o la posible utilización de la contaminante técnica de explotación petrolera del *fracking*, entre otros (Espino, 2017; Chenaut, 2017). Estas nuevas formas organizativas y de reclamos de derechos se están formulando en toda la geografía latinoamericana donde estos proyectos constituyen una amenaza, por lo que se presentan acciones legales o realizan movilizaciones, como lo han analizado diversos autores.⁴ Esto motiva diversos tipos de acciones, no sólo la protesta social, sino también que los afectados utilicen el derecho a través de acciones legales –como el amparo judicial– para obtener la suspensión de los contratos de explotación o que se decreten moratorias o cancelación de actividades que impliquen riesgos.⁵

El caso de México es ilustrativo para mostrar el impacto de las políticas neoliberales en el país, las afectaciones al medio ambiente, el debilitamiento y crisis del Estado mexicano, por lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos le fincó responsabilidades por la devastación ambiental que aquí tiene lugar. En lo particular, se acusa al Estado mexicano por la criminalización y judicialización de los conflictos sociales, el uso de la fuerza pública y la violencia contra los defensores de los territorios y el medio ambiente (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2013). Es así que en un estudio en el que participaron organizaciones y grupos de derechos humanos se concluyó sobre el impacto negativo que las reformas estructurales neoliberales tienen sobre los derechos humanos, favoreciendo a las empresas, y que los derechos más vulnerados en México son “el derecho a la tierra y el territorio, el derecho de acceso a la información, el derecho al medio ambiente sano, entre otros” (VV. AA., 2016).

Astrid Ulloa (2014) insiste en la necesidad de profundizar en el análisis de la manera en que los extractivismos –especialmente minería y petróleo– reconfiguran los territorios indígenas y cómo afectan al medio ambiente y a las dinámicas culturales, por lo que es necesario indagar sobre contextos específicos y prácticas culturales que son afectadas. Es decir, señala que se producen “transformaciones y reconfiguraciones territoriales, culturales e identitarias” (*ibidem*: 436) que se ubican en diferentes ámbitos de la vida social, como es el caso de las relaciones de género, las identidades, el medio ambiente, las interacciones sociales y económicas, las situaciones de violencia, etcétera.

El presente artículo se propone contribuir en esta dimensión poniendo el acento en la intersección de las políticas extractivas y la vulneración de derechos de los afectados, para destacar impactos socioambientales derivados del proceso de exploración y

⁴ Véase, entre otros, Delgado Ramos (2013); Damonte y Castillo (2010), así como los casos de afectaciones en todo el mundo en el Atlas Global de Justicia Ambiental, consultado el 03.11.2017, en <https://ejatlas.org>.

⁵ La técnica del *fracking*, que se utiliza para extraer hidrocarburo no convencional, ocasiona severos daños en el medio ambiente y la salud humana. Véase Alianza Mexicana contra el *Fracking* (consultado el 20.03.2017, www.nofrackingmexico.org); Pérez Castellón *et al.* (2016).

explotación de hidrocarburos. Estas situaciones tienen como correlato el incremento de la violencia y la inseguridad, además de las afectaciones a los bienes, a la salud y al medio ambiente, lo que motiva protestas y movimientos sociales que son criminalizados (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 2011), como se constata en el caso de numerosos defensores del medio ambiente que en América Latina han sido hostigados, encarcelados y hasta han perdido la vida.

1.1. LUCHANDO CON GOLIAH ¿A QUIEN ACUDIR?

Al visitar la comunidades se constatan las enormes carencias que tienen en servicios básicos, educación y salud, vivienda y medios de comunicación, entre otras.⁶ En las que se explota petróleo, el contraste entre la riqueza que se extrae por esta actividad y las necesidades de la gente resulta estridente. Un tema presente en las pláticas cotidianas es si PEMEX paga las afectaciones por los daños que se ocasionan en el medio ambiente y en la salud humanas, y cómo invierte en el Ayuntamiento y en las comunidades parte de los beneficios que obtiene. La opinión generalizada es que la empresa (y aquellas contratadas por PEMEX) no apoyan en forma adecuada a la población; sin embargo, se reconoce que al abrir caminos para la circulación de los vehículos petroleros, los campesinos se encuentran mejor comunicados y pueden sacar su producción agrícola –maíz, plátano, cítricos– al mercado.

Los habitantes pretenden que PEMEX pague los daños que causó, ya sea a la comunidad o a los individuos cuyas tierras han sido afectadas por derrames continuos de petróleo, contaminación del agua, fractura de las casas por detonaciones con dinamita bajo tierra, etc. Pero también les interesa que colabore⁷ realizando obras en las localidades, como ocurrió en la comunidad de Emiliano Zapata, cuando a través del programa PACMA⁸ se construyó un domo⁹ y un comedor comunitario, entre otros. En cuanto a la reparación de los daños causados, se sostiene que PEMEX “no hace caso”,¹⁰ y enfrentarse a esta empresa es como luchar contra Goliat,¹¹ ya que se visualiza como un ente gigantesco, que detenta todo el poder y al que no es posible o es muy

⁶ El 68.5 % de la población del municipio de Papantla se encuentra en situación de pobreza y la tasa de analfabetismo es de 12.4%. El 39.84% de los habitantes vive en hogares donde el jefe (o su cónyuge) habla alguna lengua indígena, en forma predominante el idioma totonaco. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI), en Gobierno del Estado de Veracruz/SEFIPLAN, *Cuadernillos Municipales 2014. Papantla*.

⁷ Mota Celis (2017: 1) sostiene que diversas empresas petroleras realizan trabajos para PEMEX. Pero como esta empresa es la contratante, los campesinos consideran que es su responsabilidad solucionar los problemas que genera esta explotación.

⁸ Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de PEMEX, para mejorar la calidad de vida de las comunidades donde se extrae petróleo (véase <http://www.pacma.org.mx>, consultado el 12.11.2017).

⁹ El domo es un techo que se coloca para proteger del sol en escuelas o espacios abiertos.

¹⁰ Las palabras que en el relato se encuentran entre comillas son textuales de la persona entrevistada.

¹¹ Goliat era un hombre de enorme estatura, que según la historia bíblica fue vencido en combate por David, quien sólo estaba armado con una honda y una piedra. Como metáfora, se usa para describir la lucha del débil contra el fuerte.

difícil ganar. En la actualidad, tiene lugar el proceso de reestructuración de PEMEX y algunas empresas privadas siguen trabajando en la región. Por un lado, los habitantes sintetizan su experiencia hablando e imaginando a PEMEX, como si funcionara igual que en los tiempos de la nacionalización, anteriores a la entrada de las compañías privadas. Por otro, cuando relatan que intentan obtener una reparación por los daños ocasionados, señalan que acuden a las oficinas de PEMEX y ahí les dicen que quien realiza ese trabajo es determinada compañía, adonde les responden que se dirijan a otra instancia y los afectados finalmente no saben con quien acudir.

El municipio de Papantla recibe un ingreso que otorga PEMEX a través del gobierno estatal por el petróleo que se extrae, pero a pesar de mis requerimientos, no pude obtener información relevante de las autoridades municipales.¹² Los habitantes no conocen cómo se distribuye el dinero, ni qué tipo de arreglos existen entre el municipio, el gobierno estatal, el gobierno federal, PEMEX y las compañías petroleras, pero sostienen que las autoridades municipales utilizan estos ingresos para distribuir entre todas las comunidades, no sólo las afectadas por la actividad petrolera, y plantean la asimetría que implica la devastación ambiental que sufren, aunada a la falta de recursos.

La presencia de las actividades extractivas no es homogénea a lo largo y ancho del municipio de Papantla, ya que existen enclaves, como la ciudad de Poza Rica, que continúa como el centro rector de la explotación petrolera en la región, a la vez que concentra el poder político, económico y las ofertas de bienes y servicios. Con el correr de los años surgen nuevos enclaves, como ocurrió en la comunidad de Emiliano Zapata, donde PEMEX comenzó a explotar el Campo San Andrés en el año de 1955, construyendo a mediados de 1960 instalaciones para alojar al personal de la empresa, con hotel, restaurante, oficinas, dispensario médico y alojamiento para los soldados que protegían la actividad petrolera. Al descender la producción petrolera de este campo, en la década de los ochenta, PEMEX abandona estas instalaciones que hoy en día se encuentran semiderruidas. A pesar de ello, Emiliano Zapata todavía es un enclave productivo, porque concentra la producción de hidrocarburos del Campo San Andrés que se envía a Poza Rica, pero no hay una clínica de salud para atender a esta localidad de unos dos mil habitantes, lo que contrasta con la enorme instalación petrolera ubicada en pleno centro del pueblo.

Las carencias que se viven en el medio rural, atenuadas por la existencia de programas de apoyo social como PROSPERA y el programa de Pensión para Adultos

¹² Según un informe del Ayuntamiento, en el año 2015 recibió de PEMEX en donación gasolina, diesel y asfalto para calles y caminos.

Mayores,¹³ sumadas a la corrupción generalizada que los ciudadanos perciben en los funcionarios de los diferentes niveles de la administración pública, favorecen el hecho de que ciertas necesidades –como obtener un apoyo económico para realizar la fiesta patronal de una comunidad–, sean cubiertas por otro tipo de redes que se ubican fuera de la burocracia estatal. Entre ellas cabe citar las relaciones de compadrazgo, el caciquismo, las organizaciones indígenas y de productores o los partidos políticos que de esta manera buscan aumentar su caudal de votos en las elecciones. Teniendo en cuenta este contexto, a continuación destaco algunas situaciones que muestran las dificultades que enfrentan los habitantes de las localidades afectadas para resolver los problemas derivados de la explotación de hidrocarburos.

A diez kilómetros de la cabecera municipal de Papantla, los habitantes de una localidad sufren por la carencia total de agua para las necesidades de la vida cotidiana. Este problema surge en la década del 2000, cuando una compañía contratada por PEMEX al buscar petróleo hizo estallar dinamita bajo tierra, ocasionando que se perdiera el agua de 30 pozos y de cinco manantiales, los cuales se secaron. Desde entonces, tienen que comprar agua que les surten las pipas y solicitan a PEMEX y al Ayuntamiento que tomen medidas para solucionar este problema. Entre otras afectaciones, tienen casas fracturadas por las explosiones y destrozos en los caminos por el paso de los vehículos de la empresa petrolera. Pero “nuestra voz nunca hizo eco” –sostiene la persona entrevistada– agregando que “se les advirtió que si ellos (PEMEX) no hacían caso la gente se iba a levantar”.¹⁴ Por consiguiente, en octubre de 2011, los habitantes cerraron el camino de acceso a los pozos petroleros para impedir que pasaran los vehículos de la compañía petrolera, la cual puso una denuncia contra los líderes del movimiento. Fueron detenidos dos dirigentes y trasladados a una cárcel federal, acusados del delito de cerrar las vías de comunicación.¹⁵ En esta comunidad se vive la paradoja de que la abundancia del petróleo que se extrae en estas tierras ocasiona la carencia de un recurso de vital importancia para la vida humana. El agua que compran a las pipas y depositan en un tinaco,

No dura nada, para bañarnos, para los pollos, para la ropa, no alcanza el agua y para tomar ya compramos el garrafón pero ahora sí que aquí no hay agua, ahorita

¹³ PROSPERA, programa de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) dirigido a la población en situación de pobreza. (www.gob.mx/prospera). SEDESOL tiene el programa de pensión para adultos mayores de 65 años, que reciben un apoyo económico cada dos meses (www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas). Consultados el 12.11.2017.

¹⁴ Entrevista realizada a ama de casa, Papantla, 27 de enero 2017.

¹⁵ También se giró orden de aprehensión contra la mujer que era sub-agente municipal de la comunidad (autoridad). No la detuvieron porque obtuvo un amparo judicial. En 2015 el agente municipal de otra comunidad se amparó contra la orden de aprehensión girada por realizar el bloqueo de una carretera, solicitando beneficios para su comunidad.

todavía no es nada, estamos en enero, esperemos en lo que es abril, mayo, junio [estiaje], no hay agua, se escasea, uno pide prestado una cubeta... y así estamos. Los que están trabajando compran su agüita, pero qué pasa con aquellas personas que como ahorita casi no hay empleo, no va a haber ni siquiera para el agua.¹⁶

A la falta de agua hay que agregar la inseguridad de vivir cerca de pozos petroleros, ya que algunos se ubican a pocos metros de las viviendas. Debido al peligro de esta situación, los habitantes son informados por personal de PEMEX de medidas de seguridad a tomar en caso de que se produzca una explosión, como el estallido de un ducto que ocurrió en noviembre de 2013, motivando la evacuación de 14 familias. Los habitantes se preguntan,

[...] nosotros estamos batallando aquí con todos los pozos petroleros, pero a cambio de qué, el gobierno qué nos está dando, por qué nosotros estamos sufriendo, no tenemos agua, no tenemos pavimentación, no tenemos drenaje, en absoluto no tenemos nada, entonces nosotros le pedimos a Pemex el agua potable, entubada, lo que sea, pero que sea agua. Y él (personal de PEMEX) decía que Pemex no estaba autorizado a dar agua en las comunidades.¹⁷

La cuestión de las casas que se fracturan por las explosiones bajo tierra que realizan las empresas petroleras ocurre en diversas comunidades del municipio, y algunas viviendas colapsan. En un pozo petrolero ubicado a escasos metros de algunas casas de familias, un vecino relata:

Sí, está pegado (a las viviendas), es muy peligroso. Primero nos afectaba mucho el ruido, porque antes tenía otro ruido más fuerte, pero ahora ya nos quejamos muchos, todos los que vivimos alrededor nos quejamos y vino Pemex y lo cambió porque sacaba lumbre, brotaba lumbre, y no miento porque todos los que vivimos alrededor lo vimos, salía mucha lumbre ahí [...] Ahorita está parado, pero diario, al ratito no tardan [en venir] y lo vuelven a arrancar y es un ruido constante, toda la tarde, todo el día, toda la noche. Sí, es algo estresante, porque hay veces que ya no aguanta el ruido...¹⁸

¹⁶ Entrevista realizada a ama de casa, Papantla, 27 de enero 2017.

¹⁷ Entrevista realizada a ama de casa, Papantla, 27 de enero 2017.

¹⁸ Entrevista realizada a vecinos, Papantla, 21 de febrero 2017.

Estos ejemplos remiten a la metáfora de David y Goliat comentada al comienzo de esta sección, que se expresa en las carencias, la impotencia y la sensación de inseguridad con las que muchos habitantes conviven día a día. Los afectados consideran a PEMEX como un moderno Goliat que tiene muchas cabezas, que son las compañías petroleras privadas que se asentaron en la zona en la medida en que se profundizaron las políticas energéticas neoliberales. PEMEX es también considerado un “monstruo”, con el que tienen que negociar la reparación del daño y el otorgamiento de beneficios. Pero las múltiples cabezas diluyen las responsabilidades, y cuando los campesinos quieren reclamar este pago no encuentran quién se haga cargo, según este testimonio:

Les pregunté a los maquinistas, “oigan, ¿quién les dio permiso?” [de entrar al terreno], “no, pues nosotros tenemos órdenes de PEMEX, porque nosotros pertenecemos a una compañía y PEMEX nos mandó”. Voy con PEMEX y dicen, “no, pues a nosotros nos lo dio permiso el comisariado [las autoridades del ejido]”, y voy con el comisariado y dice “yo no les di ningún permiso, ellos se metieron”.¹⁹

En esta “arena de disputas” que son las políticas y prácticas de la explotación de hidrocarburos, tanto los campesinos como los empleados de PEMEX en su vida cotidiana utilizan tácticas y estrategias para obtener beneficios económicos a costa de la otra parte. Los campesinos se las ingenian para que un animal que muere de enfermedad o de picadura de víbora sea reconocido como afectado por la contaminación petrolera y se les pague el daño; al mismo tiempo, los empleados de PEMEX sobornan a su favor a ciertas autoridades ejidales para obtener permisos o niegan que algunos daños sean producidos por la contaminación. De esta manera, se borran y difuminan las líneas que separan lo legal de lo ilegal (Comaroff y Comaroff, 2009: 29, 31) y se configura una “zona gris” donde no es posible oponer a unos y a otros de forma tajante (Auyero, 2007: 53).

Ante los daños que la explotación petrolera ocasiona al medio ambiente se genera una situación que ha sido definida por la burocracia de PEMEX como “la industria del reclamo”. Esto implica que no siempre las afectaciones que se denuncian son reales, sino que el afán de lucro de presidentes municipales y ciudadanos los motiva a reclamar indemnizaciones que no les corresponden, con el objetivo de obtener beneficios a su favor (Ramírez Carrillo, 2007). Esto se relaciona con las dificultades que tienen los afectados para obtener reparación de los daños, y sus carencias frente a la riqueza que

¹⁹ Entrevista realizada a ejidatario, Xalapa, Veracruz, 10 de marzo de 2017.

se extrae del subsuelo. Por lo tanto, la “industria del reclamo” se convierte en una estrategia que permite a éstos “acceder a los recursos, generándose relaciones perversas y de clientela entre la empresa y distintos actores y sectores sociales” (Ballón, s. f.: 12).

En la siguiente sección me propongo profundizar en las tensiones sociales derivadas de la explotación de hidrocarburos en la región, poniendo el acento en destacar la judicialización de los casos de protesta, como un ejercicio de poder y estrategia del Estado para controlar la disidencia, lo que favorece las políticas extractivas. En este contexto, donde se intersectan políticas energéticas, prácticas judiciales y vulneración de derechos humanos, se reconfiguran dinámicas sociales, personales y espaciales.

2. EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

El embate de las políticas extractivas sobre los territorios de los pueblos indígenas ocasiona protestas y reclamos por parte de los afectados, quienes luchan por sus derechos colectivos a ser consultados y a tomar decisiones sobre sus territorios. Con tal motivo, por la vía legal promueven amparos en las instituciones de justicia, obteniendo algunos triunfos. También resisten activamente y se movilizan cerrando caminos, puentes, acceso a pozos petroleros, manifestando su descontento de diversas formas para que su voz sea escuchada. Muchas de estas acciones son criminalizadas por parte de los Estados cometándose detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso así como a los derechos humanos y colectivos de los afectados. En el marco de la Reforma Energética (2013), en México se ha constituido un entramado jurídico de leyes secundarias que pueden llegar a criminalizar la protesta social (Chenaut, 2017). Entre ellas, cabe mencionar la reciente Ley de Seguridad Interior (2017), cuestionada por académicos y organizaciones sociales, por la cual se legaliza la presencia del Ejército y la Marina en las calles para realizar operaciones de control social (Olivares Alonso, 2018a).

A continuación analizo dos casos que tuvieron lugar en la región de estudio en tierras ejidales,²⁰ en los que la judicialización de la protesta produce reconfiguraciones que afectan diferentes ámbitos de la vida social, ya sea los usos de la tierra o el cuerpo y las emociones.

²⁰ El ejido es una forma de tenencia de la tierra derivada de la Reforma Agraria que otorgó tierras a los campesinos.

2.1. LA TIERRA PROMETIDA

Durante la década de los cincuenta, PEMEX –que tiene su base de operaciones en el colindante municipio de Poza Rica– expande sus actividades en el municipio de Papantla, y cuando es necesario realiza expropiaciones de las tierras de los campesinos para la instalación de pozos petroleros e infraestructura.

Cuando suceden derrames de petróleo en tierras cultivadas la empresa paga a los afectados cierta cantidad de dinero por los daños ocasionados. En 2017 visité una parcela de tierra ejidal donde ocurrió un derrame de miles de litros de petróleo que estuvo manando alrededor de un mes, hasta que personal de PEMEX se llevó toda la tierra que se consideraba inutilizable, prometiendo al ejidatario regresarle tierra de buena calidad, que hasta ese momento no había recibido. En el terreno no puede crecer hierba por la contaminación, ya que el petróleo penetró toda la capa fértil. El afectado enfatiza sobre las estrategias que tienen los empleados de PEMEX para no asumir las responsabilidades por los daños; se manifiesta la impotencia que ellos sienten al tener que enfrentarse con esta empresa. “Te vas a pelear con un gigante, con Sansón. Nunca les ganamos, ellos están preparados para mentir”, sostiene.²¹ Entre plantaciones de cítricos nos conduce a un pozo de extracción de petróleo ubicado en otra sección de su parcela cultivada con naranjas, donde también hubo derrames y contaminación; el pozo se localiza en el centro de una explanada, en un lugar que antes era zona vainillera, producción que –según relata– se destruyó como consecuencia de las actividades petroleras.

2.2. LOS DERECHOS DEVALUADOS

A pesar de que el ejidatario afectado solicitó reparación del daño a PEMEX por el derrame de hidrocarburos, al no obtener respuesta puso obstáculos en el camino para impedir que la empresa acceda al pozo petrolero. Por este motivo, PEMEX inició en su contra un procedimiento judicial de orden civil que se conoce como “Acción de Jactancia”,²² por la que PEMEX pide al demandado que respete su derecho de propiedad respecto a la servidumbre de paso y a la plataforma donde se ubica el pozo y que no obstaculice el acceso al mismo.

La Acción de Jactancia se establece porque –de acuerdo con el documento– “el demandado ha expresado públicamente tener algún derecho de propiedad sobre la

²¹ Sansón fue un juez israelita que según la historia bíblica tenía una enorme fuerza para combatir a sus enemigos.

²² La Acción de Jactancia se aplica “cuando alguno se jacte públicamente de que otro es su deudor, o de que tiene que deducir derechos sobre alguna cosa que otro posee”. Si en un plazo determinado por el juez la persona que se jacta no ejerce su acción, pierde todo derecho sobre la misma (Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, Art. 12, I). La Acción de Jactancia puede aplicarse en diversas situaciones de la vida social. Agradezco al afectado porque me permitió consultar el expediente judicial de este caso.

fracción que viene detentando PEMEX Exploración y Producción”. El núcleo central de este argumento reside en que **“la industria petrolera es de utilidad pública, preferente sobre cualquier aprovechamiento** de la superficie y del subsuelo de los terrenos, **incluso sobre la tenencia de los ejidos** o comunidades, y **procederá la ocupación provisional**, la definitiva o la expropiación de los mismos, **mediante la indemnización legal, en todos los casos en que lo requieran** la Nación o su industria petrolera”.²³

Al iniciar este procedimiento judicial, PEMEX busca garantizar que en el futuro no se colocarán nuevos impedimentos para ingresar al pozo, que el demandado declare ante un juez que no tiene derecho a oponerse al paso de los vehículos de la empresa petrolera. Pero el ejidatario no está disputando la propiedad de esa porción de tierra que ha sido expropiada por PEMEX, sino que se reconozcan los daños que en su parcela ocasiona la explotación petrolera.

Según el abogado que lo asesora, éste es el primer caso de aplicación de la nueva Ley de Hidrocarburos (2014) en la región; a pesar de que el reclamo de PEMEX se sustenta en el entramado legislativo que concierne a la propiedad de los bienes del subsuelo de la nación, la demanda de Acción de Jactancia fue desechada porque no se pudo sustentar y tiempo después el ejidatario obtiene cierta cantidad de dinero como reparación por los daños del derrame. Él sigue esperando que le entreguen la tierra prometida,²⁴ aún cuando en algún momento le informan de que “No podemos entregarle su tierra porque tiene un proceso civil, y si sigue haciendo [problemas] lo vamos a demandar penalmente”.²⁵

El eje central de esta causa judicial se relaciona con la cuestión de los derechos sobre la tierra. ¿Qué impacto tiene en la población el hecho de que la explotación de hidrocarburos sea de *utilidad pública y preferente* sobre otras actividades? ¿Cómo afecta sus derechos humanos y aquellos derivados de la legislación agraria? Como se sostuvo con anterioridad, el fundamento jurídico de la reclamación de Pemex se basa en la Reforma Energética (2013), que permite que el sector privado celebre con el Estado asignaciones o contratos para la exploración o extracción de hidrocarburos, estableciendo que estas actividades “tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a

²³ Fuente: Pemex Exploración y Producción vs. EDH, Escrito al Juez de Distrito en turno, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, 23 de setiembre 2015. El énfasis en negritas se encuentra en el documento de PEMEX, DJ/SJOR/GJRNE/IHR/6341/2015. Con anterioridad Pemex expropió casi 100 hectáreas del ejido para instalar pozos petroleros.

²⁴ Entrevista a ejidatario, Papantla, Veracruz, 23 de enero 2017.

²⁵ Entrevista a abogado que asesora al demandado, Papantla, Veracruz, 27 de marzo de 2016.

aquellas”.²⁶ Teniendo en cuenta estas disposiciones y el hecho de que los hidrocarburos son propiedad de la Nación, los dueños de las tierras (ejidal, comunal o privada) se encuentran en una situación en la que están obligados a ceder sus propiedades a las empresas petroleras, que pueden ocuparlas bajo las formas legales de “arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta, y cualquier otra que no contravenga la ley”.²⁷ De esta manera, se crean mecanismos para el despojo de la tierra, careciendo de protección legal las propiedades del medio rural, ya que se conformarán grandes extensiones de tierra en manos de las compañías privadas, lo que provocará desplazamientos de la población, especulación, privatización del agua, así como ruptura del tejido social (Hernández Navarro y de Ita Rubio, 2016). La Ley de Hidrocarburos y su reglamento establecen cuales son los mecanismos y procedimientos mediante los cuales los asignatarios y contratistas van a adquirir la tierra y se van a aplicar estas formas legales. Este es un tema medular porque, como sostiene Pérez Castañeda (2014: 19, 21), estos procedimientos

tienden a desposeer a los dueños de la tierra de los beneficios concomitantes a sus derechos de propiedad, mediante un mecanismo que equivale a una suerte de arrendamiento forzoso tramitado en forma sumaria [...] Los núcleos poblacionales (ejidales) quedan sin la tutela de la legislación agraria y prácticamente a expensas de las condiciones que los titulares de las asignaciones de explotación de hidrocarburos quieran imponer.

En el caso que se comenta, la instalación del pozo afecta los derechos agrarios de propiedad sobre la parcela del ejidatario, por los daños ocasionados a sus cultivos; pero ante el fundamento de la utilidad pública y el beneficio para toda la nación, estos derechos derivados de la legislación agraria se convierten en “un derecho sin fuerza, precario, devaluado” (Pérez Castañeda, 2014: 20). La Acción de Jactancia y la amenaza de iniciar una acción penal en su contra en caso de seguir con su movilización para que se cumpla la reparación del daño, es una muestra de las tensiones que en el contexto de la implementación de la Reforma Energética genera la explotación de hidrocarburos en el medio rural.

²⁶ “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía”, transitorio 8, *Diario Oficial de la Federación*, 20 diciembre 2013.

²⁷ “Ley de Hidrocarburos”, *Diario Oficial de la Federación*, 11 de agosto 2014, art. 101, V.

2.3. LAS INTERSECCIONES DE GÉNERO Y DERECHO

En octubre de 2015, una mujer joven que era autoridad en su comunidad²⁸ atendió a dos hombres que la buscaron para realizar un trámite. La sacaron de su casa con engaños, de inmediato la detuvieron y la trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGR) de la ciudad de Poza Rica. Al día siguiente, la enviaron en avión comercial a la Ciudad de México y luego a Tepic, Nayarit, donde fue internada en el CEFEFE,²⁹ centro federal de detención femenina de máxima seguridad donde permaneció nueve días.

Fue acusada de cometer “Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales”,³⁰ siete meses después de participar junto con habitantes de la localidad en el cierre del camino que conduce a un pozo petrolero, ubicado dentro del ejido. La historia de desacuerdos con PEMEX remonta a tiempo atrás, teniendo en cuenta que esta empresa comenzó a operar allí hacia el año de 1957; en los últimos años, la empresa petrolera Oleorey operaba los pozos y los habitantes, considerando que ambas tienen que devolver a la población algo de lo que se llevan al extraer petróleo, se movilizaron solicitando la introducción del drenaje y la pavimentación de unos kilómetros de la carretera. Se estableció un acuerdo entre PEMEX, el Ayuntamiento y el gobierno estatal para realizar las obras, que no se cumplió. Por ello, en el mes de abril de 2015 se realizó una protesta que duró varios días, cerrando el camino al pozo, aunque permitieron que personal de PEMEX realizara su mantenimiento. Pocas horas después de levantarse esta toma, ocurrió un derrame de petróleo. Por este motivo, meses después ella y otros activistas recibieron orden de aprehensión. En su calidad de autoridad de la localidad, fue acusada de ser responsable de este derrame.

En ese momento la detenida tenía 26 años, una hija de cinco semanas de nacida y otra de cinco años. El embarazo era de alto riesgo y no se había recuperado de la cesárea anterior cuando fue detenida. Este caso judicial fue ampliamente comentado en los medios de información locales, que reconocieron lo improcedente de su detención. Incluso, su situación se elevó hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que emitió una recomendación a las autoridades correspondientes;³¹ últimamente, la CNDH atrajo el caso en la Sección de Personas Vulnerables.³² Su salida de la cárcel se logró gracias al apoyo de familiares y organizaciones de la sociedad civil,

²⁸ El ejido se ubica en el vecino municipio de Gutiérrez Zamora.

²⁹ CEF EFE, Centro Federal Femenil Noroeste de Tepic, Nayarit.

³⁰ El Código Penal Federal, Cap. I, art. 253 define que este delito “son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional”, entre ellos “interrumpir o interferir intencionalmente la producción, o el servicio de almacenamiento o distribución de gas natural, artificial o licuado de petróleo” (inciso j).

³¹ CNDH, Recomendación No. 07/2016, en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2016/Rec_2016_007.pdf. Se emiten recomendaciones a la Procuradora General de la República y al Comisionado Nacional de Seguridad. Consultado el 25.06.2017.

³² Entrevista realizada a la detenida, municipio de Gutiérrez Zamora, 27 de enero de 2017.

que juntaron el dinero de la fianza. En la plática que sostuvimos se hacen evidentes los recuerdos dolorosos de estos hechos que todavía están muy presentes en su memoria y en sus emociones. En lo personal, los efectos de la detención alteraron su vida y la de su familia, y el estrés postraumático todavía la afecta en su cotidianidad.

La recomendación de la CNDH pone el acento en destacar la vulneración del “derecho a la protección de la salud” de la detenida por su reciente cesárea y porque no podía alimentar a su hija; el derecho “de la legalidad y acceso a la justicia”, debido a su internación en un centro penitenciario federal lejano a su domicilio, ya que ella no necesitaba medidas de seguridad especiales; además, en el estado de Veracruz existen penales para mujeres, y esta distancia de su medio y de su familia fue violatoria del derecho a una defensa adecuada. Se vulneró el “derecho al interés superior de la niñez” porque se suspendió abruptamente la alimentación de su hija recién nacida y se afectó el equilibrio emocional de la otra niña ante la ausencia materna; por último, se vulneró el “derecho a la lactancia”, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda alimentar a los recién nacidos con leche materna en los primeros seis meses de vida, para prevenir la mortalidad infantil. Por lo tanto, se emitieron recomendaciones instando a “implementar las medidas que sean necesarias para conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos no se repitan” (p. 31), y a “reparar el daño ocasionado” (p. 32).³³ Además, se vulneró el derecho a manifestarse y a reclamar que se cumplieran los acuerdos establecidos con autoridades de distintos niveles de la administración pública, así como la violación al derecho al debido proceso, ya que al ser detenida no le mostraron la orden de aprehensión y convivió en la cárcel con mujeres acusadas de graves delitos del orden federal.

Esta recomendación pone el énfasis en analizar la vulneración de derechos de la detenida debido a su condición de género y el correlato de su reciente maternidad, así como las condiciones de acceso a la justicia. Esta es una dimensión relevante, sin duda. Pero es necesario considerar también la perspectiva de la interseccionalidad (Crenshaw, 1991; Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015), para situar su detención en el contexto de las varias dimensiones que se articulan en este caso de violencia cometida por los agentes del Estado. El hecho de analizar la dimensión del género tiene ciertas limitaciones, en la medida en que se otorga relevancia al eje de desigualdad derivado de las relaciones hombre-mujer; es necesario, además, dimensionar varias condiciones que se intersectan, como “la etnia, raza, lo sexual, la edad, territorio o clase social (entre otros)” (Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015: 600). En el caso que se

³³ La información contenida en este párrafo es un resumen del documento Recomendación 07/2016, CNDH, Ciudad de México, 29 de febrero de 2016, en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2016/Rec_2016_007.pdf. Consultado el 25.06.2017.

analiza en este artículo, se trata de una mujer joven (probablemente mestiza) que es agente municipal (autoridad) de una comunidad ejidal habitada por campesinos que exigen derechos y cumplimientos de acuerdos con las autoridades locales y PEMEX. Su vulnerabilidad como mujer en un medio rural donde predomina el orden patriarcal, su figura de autoridad como representante de su pueblo, las condiciones de pobreza y exclusión de su comunidad y una disputa territorial por el acceso a los recursos del subsuelo, la convierten en un símbolo del poder desigual con que se enfrentan estos campesinos a las políticas extractivas del Estado. De esta manera, la desigualdad del género se intersecta con otras desigualdades, que en este caso pueden considerarse como la clase social, la marginación, la violencia estructural de la pobreza y los codiciados recursos naturales del entorno. Estas condiciones son propicias para –a través del encarcelamiento– enviar el mensaje de que no es conveniente realizar movilizaciones sociales. De esta manera, la representación de PEMEX como “Goliat”, “Sansón”, o “monstruo” implica la desigualdad de poder y la violencia institucional a la que se enfrentan.

Además, hay que considerar la relevancia del derecho y los procedimientos judiciales como productores y reproductores de relaciones asimétricas de género, lo que pudo tener incidencia en la situación jurídica y el trato recibido por la detenida a lo largo del procedimiento judicial. Al analizar las relaciones entre género y derecho, Carol Smart (1994) ha destacado que el derecho reproduce el género en la formulación de ciertas leyes (civiles y penales) a través de las cuales se definen identidades y roles de género, lo que a su vez incide en las subjetividades de los actores sociales influyendo en sus prácticas, representaciones y modos de vida. Por otro lado, se plantea que en los procedimientos judiciales los jueces, escribientes y abogados tienen sus particulares ideologías patriarcales de género, que pueden tener incidencia en la manera de analizar un caso, fijar una sentencia y decidir cuáles son las normatividades que en él se aplican. En su estudio sobre mujeres presas por homicidio en la Ciudad de México, Elena Azaola (1996) muestra que las mujeres reciben una sentencia mayor que los hombres por el mismo delito, debido a que la sociedad no acepta que en su rol maternal ellas puedan cometer este tipo de crímenes.

En suma, de acuerdo a los Comaroff, existe un “fetichismo de la legalidad” (2009: 48) en la poscolonia neoliberal, ya que al reducirse el Estado, las leyes –y el derecho– son utilizados por los sectores en pugna. De esta manera, se produce un incremento de casos que se judicializan por acciones que provienen de los movimientos sociales, pero también por las autoridades y el aparato judicial del Estado, lo que lleva implícita la amenaza de la criminalización.

3. REFLEXIÓN FINAL

El panorama que se presenta en este artículo incita a reflexionar sobre los impactos que tienen las políticas extractivas en las poblaciones en las cuales se lleva a cabo, la criminalización de la protesta social y la vulneración de derechos humanos que tiene lugar con este motivo, ya que la contaminación del agua y de los recursos naturales producen alteraciones en el medio ambiente y en la salud que afectan en forma negativa a los habitantes y al territorio donde se asientan. Los pueblos indígenas establecen una relación particular con el medio ambiente, como lo han destacado diversos estudios.³⁴ Por ello, plantean la necesidad de la defensa del “territorio”, concepto más amplio que el de “tierra”, ya que implica el lugar donde se vive, pero también donde yacen los ancestros, donde se localizan los lugares sagrados, donde se cultiva la tierra y se habita, casi siempre en la cercanía de ríos y fuentes de agua. Es decir, el lugar donde se encuentran las raíces, la historia y la vida. Así, sostiene un líder indígena, “no es que nosotros somos dueños del agua, es que el agua es nuestra vida y por eso tenemos un mandato... ser al mismo tiempo sus hijos, pero también sus guardianes, sus protectores”.³⁵

Ante el avance de las políticas extractivas (petróleo, minería, eólicas) en las regiones indígenas de México, el discurso político de los activistas y del movimiento indígena recupera la dimensión de su medio ambiente como un territorio, para contraponerlo a la devastación ambiental que producen estas políticas. Al mismo tiempo, en la región de estudio se ha generado un movimiento contra los megaproyectos, que ha desatado una campaña informativa, intensificando los lazos con otras organizaciones ambientalistas, motivo por el cual se conforma un amplio abanico de opositores pertenecientes a diversos pueblos indígenas y a la población mestiza. Se reflexiona sobre las raíces y sobre el significado del progreso que ellos buscan, se debate y aportan diferentes perspectivas sobre este tema de candente actualidad. Similares preocupaciones tienen lugar en ejidos del sur de Veracruz, en comunidades y municipios nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla y entre los zoques de Chiapas, entre otros casos en México. Defender el territorio y la vida se encuentra en el centro de los planteamientos de las organizaciones que se proponen resistir contra los megaproyectos resultado de las políticas neoliberales. Pero este activismo de las

³⁴ El artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce la distinción entre “tierra” y “territorio”. Mientras que el primer término se refiere a los derechos jurídicos sobre la tierra, en el segundo se hace referencia al hábitat donde habitan los pueblos indígenas que comprende el agua, el medio ambiente, las zonas arqueológicas, lugares sagrados, etc. (véase Gómez, 1991; López Bárcenas, 2015).

³⁵ Palabras pronunciadas por un asistente al “Conversatorio de danzantes del Totonacapan”, en el marco del festival artístico y cultural Cumbre Tajín, Papantla, 19 de marzo de 2017.

organizaciones de la sociedad civil tiene su correlato en la criminalización de la protesta social y la posible persecución de sus dirigentes, poniendo en riesgo sus vidas.

Algunos entrevistados sostienen que “antes” (en las primeras décadas de la explotación petrolera) no protestaban porque a pesar de las afectaciones había suficiente tierra a la cual desplazarse para cultivar, además de la “ignorancia de los abuelos” que eran analfabetos, no conocían las leyes y no se tenía mayor información sobre las formas de reclamar reparación del daño, en caso de que éstas existan. A ello se suma el hecho de que durante el gobierno incuestionable del Partido Revolucionario Institucional (PRI) su hegemonía establecía limitaciones para la protesta y el descontento social. De acuerdo a los testimonios orales, las movilizaciones que reclaman apoyos de PEMEX a través del cierre de carreteras, de pozos petroleros y diversos tipos de protestas, datan de hace un par de décadas, desde antes de la Reforma Energética, lo que relaciona los cambios en la política energética con un avance en el conocimiento del tema de los derechos humanos, la reducción del analfabetismo, la difusión que realizan los medios de comunicación y la migración que abre horizontes. Esto sugiere que hay modificaciones en la manera en que los campesinos se representan en su relación con PEMEX y con la burocracia petrolera.

Cuando PEMEX era una empresa nacionalizada (desde 1938) los pobladores afectados se relacionaban directamente con estos actores sin intermediarios. Desde que se inició el proceso de privatización de PEMEX, hacia fines de la década de los ochenta, en forma paulatina se hizo más compleja esta relación, a medida que comenzaron a operar las compañías privadas, que están en la zona un determinado tiempo y luego se van, fragmentando las representaciones que los habitantes tienen sobre la empresa petrolera. En las representaciones locales, la estabilidad que proporciona el PEMEX nacionalizado se enfrenta a la inestabilidad y dispersión que ocasionan las múltiples compañías que realizan sólo una parte del trabajo. Cuando hablan de sus afectaciones, los campesinos sintetizan la problemática refiriéndose a este complejo entramado de compañías hablando de PEMEX, como si la empresa siguiera funcionando sin los cambios que han tenido lugar desde los años ochenta.

Con la criminalización de la protesta social, las políticas estatales se convierten en una expresión de la defensa de los intereses que promueve el extractivismo. La represión es una de las maneras de criminalizar, a la que debe sumarse el modo en que los operadores de la justicia interpretan las leyes, así como la creación de un nuevo marco jurídico que tiene como fin proteger los intereses extractivos (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 2011). Es indudable que existen impactos sociales y ambientales –como la contaminación de arroyos y fuentes de agua– que afectan a todos los habitantes por igual. Sin embargo, es necesario contextualizar cómo

se producen estos impactos en situaciones particulares, para mostrar el tipo de reconfiguraciones que se producen. Es decir, las políticas extractivas ejercen impactos diversificados que, dependiendo del contexto, penetran en todos los poros del cuerpo social y en el medio ambiente. En el caso de los habitantes que están sin agua debido a la explotación petrolera, en este municipio donde el verde de la vegetación y la abundancia de los ríos es deslumbrante, se alteran las dinámicas comunitarias y la vida cotidiana de la gente por la carencia del líquido, afectando la alimentación, la salud y la producción agrícola, entre otras cuestiones. El ejidatario en cuya tierra ocurre un derrame de petróleo, tiene que reconfigurar el uso del espacio ya que no puede seguir con sus cultivos, la producción de vainilla se acaba y la de cítricos corre el riesgo de contaminarse. La joven mujer encarcelada tiene que adecuar su cuerpo, sus emociones y las dinámicas familiares debido a la detención que sufre, además de superar el miedo y la angustia que le ocasionan la distancia y el encarcelamiento.

Por último, en este artículo he señalado tres casos en que se giró orden de aprehensión contra autoridades de sus comunidades, aunque sólo se materializó el de esta mujer, porque los otros dos se ampararon. Pero estos sucesos, que tuvieron lugar en el contexto de la nueva legislación derivada de la Reforma Energética, son un llamado de atención para mostrar la tensa relación que existe en la actualidad entre PEMEX, las compañías privadas que todavía operan en la región, los campesinos y el poder simbólico del Estado para amedrentar a los ciudadanos a través de su intención de sancionar penalmente a las autoridades que los representan. El tema de la vulneración de los derechos humanos (Gudynas, 2013) y de los derechos de los pueblos indígenas adquiere singular relevancia en estos contextos.

Revisado por Valentina Gatti

VICTORIA CHENAUT

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) | Laboratorio Mixto Internacional-MESO (CIESAS/IRD/Flacso-Costa Rica)
Avenida Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, CP 91170, Xalapa, Veracruz, México
Contacto: vchenaut@cieras.edu.mx

Recibido: 29.06.2017

Aceptación comunicada: 27.03.2018

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez de la Borda, Joel (2006), *Crónica del petróleo en México. De 1863 a nuestros días*. México: PEMEX, Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos.
- Auyero, Javier (2007), *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Azaola Garrido, Elena (1996), *El delito de ser mujer. Hombres y mujeres homicidas en la Ciudad de México: historias de vida*. Ciudad de México: CIESAS/Plaza y Valdés.
- Ballón, Eduardo (s. f.), "Relatorio del III Foro Latinoamericano. Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas". Consultado el 18.12.2017, en <http://redextractivas.org/wp-content/uploads/2016/08/K-GPC-RELATORIO-DEL-III-FORO-LATINOAMERICANO.pdf>.
- Bartlett Díaz, Manuel; Vargas, Rosío (2016), *Reforma Energética: El poder duro y consensuado para imponerla*. México: Promographics/Senado de la República.
- Chenaut, Victoria (2014), *Género y procesos interlegales*. México: CIESAS/El Colegio de Michoacán.
- Chenaut, Victoria (2017), "Las paradojas del Estado mexicano en un municipio de Veracruz", in Santiago Bastos y María Teresa Sierra (coords.), *Pueblos indígenas y Estado en México. La disputa por la justicia y los derechos*. México: CIESAS, 126-160.
- Comaroff, Jean; Comaroff, John L. (2009), *Violencia y ley en la poscolonia: una reflexión sobre las complicidades norte-sur*. Buenos Aires/Barcelona: Katz/Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.
- Crenshaw, Kimberle (1991), "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color", *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299. Consultado el 02.02.2018, en <https://www.racialequitytools.org/resourcefiles/mapping-margins.pdf>.
- Damonte, Gerardo; Castillo, Gerardo (2010), "Presentación: una mirada antropológica a las industrias extractivas en los Andes", *Anthropologica*, XXVIII(28), Supl. 1, 5-19. Consultado el 02.02.2018, en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/1366>.
- D'Amico, Paula (2013), "El conflicto por explotación petrolera en Llancanelo: miradas desde la ecología política", in Gian Carlo Delgado Ramos (coord.), *Ecología política del extractivismo en América Latina: casos de resistencia y justicia socioambiental*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 123-141.
- Delgado Ramos, Gian Carlo (coord.) (2013), *Ecología política del extractivismo en América Latina: casos de resistencia y justicia socioambiental*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- Espino Vázquez, Óscar (2017), "Pobreza y desigualdad en el Totonacapan Veracruzano, buscando respuestas desde los Derechos Humanos: experiencias de intervención interlegal para la defensa del territorio", mecanoscrito. Xalapa, México.
- Geocomunes (2016), *Territorialización de la Reforma Energética: el control privado de la explotación, el transporte y la transformación energética en el noreste de México*. México: Geocomunes/Rosa Luxemburg Stiftung.
- Gómez, Magdalena (1991), *Derechos Indígenas. Lectura comentada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo*. México: INI.

- Gudynas, Eduardo (2013), "Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales", *Observatorio del Desarrollo*, 18, Centro Latinoamericano de Ecología Social, Montevideo (Uruguay), febrero, 1-17. Consultado el 12.10.2016, en https://www.researchgate.net/publication/281748932_Extracciones_Extractivismo_y_Extrahecciones_Un_marco_conceptual_sobre_la_apropiacion_de_recursos_naturales.
- Guzmán Ordaz, Raquel; Jiménez Rodrigo, María Luisa (2015), "La interseccionalidad como instrumento analítico de interpelación en la Violencia de Género", *Oñati Socio Legal Series*, 5(2), 596-612. Consultado el 21.02.2018, en <http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/443/679>.
- Hernández Navarro, Luis; de Ita Rubio, Ana (comps.) (2016), *La nueva servidumbre agraria y la resistencia indígena y campesina*. México: CECCAM. Consultado el 20.03.2017, en http://ceccam.org/sites/default/files/Libro%20electrónico_0.pdf.
- López Bárcenas, Francisco (2015), *¡La tierra no se vende! Las tierras y los territorios de los pueblos indígenas en México*. México: CECCAM/IMDEC.
- Mota Celis, Juan Armando (2017), *Explotación petrolera en Chicontepec: extractivismo, reconfiguraciones socio-territoriales y conflicto en poblaciones rurales de Puebla y Veracruz (2007-2016)*. Tesis para obtener grado de Maestro en Antropología Social presentada en CIESAS, Ciudad de México, Mexico.
- Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (2011), *Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina*. Quito, Ecuador: OCMAL/ACCIÓN ECOLÓGICA. Consultado el 06.11.2017, en <https://www.ocmal.org/cuando-tiemblan-los-derechos-extractivismo-y-criminalizacion-en-america-latina/>.
- Olivares Alonso, Emir (2018a), "La Ley de Seguridad Interior, estrategia de control, afirman investigadores", *La Jornada*, 28 de febrero.
- Olivares Alonso, Emir (2018b), "México rendirá cuentas sobre derechos ante un comité de Naciones Unidas", *La Jornada*, 12 de marzo, 10.
- Padierna, Dolores (2015), *La nueva tragedia de México: la Reforma Energética*. México: Editorial Planeta Mexicana.
- Pérez, Ana Lilia (2017), *PEMEX RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana*. México: Grijalbo.
- Pérez Castañeda, Juan Carlos (2014), "Tierra, desamortización y ley de hidrocarburos", *Artículos y ensayos de Sociología Rural*, 9(18), 7-27. Consultado el 08.12.2017, en https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUK_Ewjlt97DIPbZAhVD6YMKHQWVD9sQFghEMAM&url=http%3A%2F%2Fsociologia.chapin.go.mx%2Fclass%2Felfinder-2.0-rc1%2Fphp%2Fconnector_portal_paginas.php%3Fcmd%3Dfile%26target%3DI1_ZG9jdW1lbnRvcy9hcnRpY3Vsb3MgeSBibnNheW9zL2FydGljdWxvcyB5IGVuc2F5b3NfMTgucGRm&usq=AOvVaw35EIYtpQVZ1BcPVBZdcQYM.
- Pérez Castellón, Ariel; Puentes Riaño, Astrid; Rodríguez, Haydeé; Herrera Santoyo, Hector; AIDA (2016), *Principio de precaución: herramienta jurídica ante los impactos del fracking*.

- Ciudad de México: AIDA/Heinrich Böll Stiftung. Consultado el 28.02.2018, en <https://agua.org.mx/biblioteca/principio-precaucion-herramienta-juridica-ante-los-impactos-del-fracking/>.
- Ramírez Carrillo, Luis Alfonso (coord.) (2007), *En la ruta del petróleo. Impactos de una eventual explotación petrolera en Yucatán. Tomo III. El contexto regional: Política, empresariado y petróleo en Campeche y Tabasco*. México: Fundación Plan Estratégico de Mérida. Consultado el 15.06.2016, en <http://www.acervoyucatan.com/contenidos/En la Ruta del Petroleo Tomo II.pdf>.
- Rousseau, Isabelle (2017), *Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales, 1900-2014. (Trayectorias comparadas de Pemex y PdVSA)*. Ciudad de México: El Colegio de México.
- Santos, Boaventura de Sousa (2009), “El pluralismo jurídico y las escalas del derecho”, in Boaventura de Sousa Santos, *Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho*. Madrid: ILSA/Trotta, 52-80.
- Smart, Carol (1994), “La mujer del discurso jurídico”, in Elena Larrauri (comp.), *Mujeres, derecho penal y criminología*. Madrid: Siglo XXI.
- Tribunal Permanente de los Pueblos (2013), *Segunda audiencia temática “Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos”*. Ciudad de México, 15-17 de noviembre. Consultado el 15.10.2017, en <http://www.afectadosambientales.org/wp-content/uploads/PROGRAMA-AUDIENCIA-AMBIENTAL.pdf>.
- Ulloa, Astrid (2014), “Geopolíticas del desarrollo y la confrontación extractivista minera: elementos para el análisis en territorios indígenas en América Latina”, in Barbara Göbel y Astrid Ulloa (comps.), *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/ Berlin: Ibero-Amerikanisches Institut, 425-458.
- VV. AA. (2016), *México: Empresas y Derechos Humanos. Compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU*. México, 29 de agosto de 2016. Consultado el 22.07.2017, en https://www.aida-americas.org/sites/default/files/informe_mx_empresas_ddhh_68.pdf.